

**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:**  
**"PROMOVIDA POR JEIMNY PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION DE COSME VERA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JEIMNY PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION DEL SR. COSME VERA C/ HOSPITAL DE TRAUMA "PROF. DR. MANUEL GIAGNI" S/ AMPARO". AÑO: 2018 - N.º 2107.**-----

**RECIBIDO**  
**30 DIC 2018**  
**Roque López**  
**S.P.D.E.P.J.**

**ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO:** Mil Ciento treinta y cinco

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores **GLADYS BAREIRO DE MÓDICA, ANTONIO FRETES y MIRYAM PEÑA CANDIA**, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR JEIMNY PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION DE COSME VERA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JEIMNY PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION DEL SR. COSME VERA C/ HOSPITAL DE TRAUMA "PROF. DR. MANUEL GIAGNI" S/ AMPARO"**, a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la Abogada Abigail Irene Alonso Ortega y la Señora Jeimni Pamela Vera Martínez, en representación del Señor Cosme Vera.-----

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: -----

#### **CUESTION:**

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?-----

A la cuestión planteada la Doctora **BAREIRO DE MÓDICA** dijo: La Abg. Abigail Irene Alonso Ortega y la Señora Jeimni Pamela Vera Martínez, en representación del Señor Cosme Vera, promovieron acción de inconstitucionalidad contra la S.D. N° 295 de fecha 23 de julio de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno de la Capital y, contra el Acuerdo y Sentencia N° 38 del 08 de agosto de 2018 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala de la Capital, en los autos caratulados: "*Jeimny Pamela Vera Martínez en representación del Sr. Cosme Vera c/ Hospital del Trauma "Prof. Dr. Manuel Giagni" s/ Amparo*". Igualmente, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley N° 3441. -----

Debemos establecer, *ab-initio*, el orden en que serán analizadas las pretensiones, pues, como se ha señalado, nos encontramos ante la impugnación de inconstitucionalidad de dos resoluciones judiciales y un acto normativo. Resulta conveniente analizar primeramente la constitucionalidad del acto normativo, pues se advierte que el mismo sustentó el fallo de primera instancia y de resultar aquél inconstitucional, también lo será éste<sup>1</sup>. -----

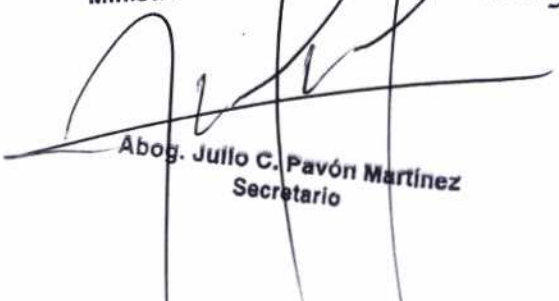
El estudio de constitucionalidad requiere una observación previa de la situación acaecida, a fin de lograr una comprensión íntegra de las circunstancias que han llevado la actora a considerar que determinados derechos fundamentales pudieron ser violentados, primeramente, por la aplicación de la norma

<sup>1</sup>Inconstitucionalidad Indirecta: La resolución judicial es inconstitucional, en forma indirecta, cuando se funda o aplica una ley contraria a la Constitución. Dice la Constitución: "Toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley" (Art. 256, 2° p., la. p. CN). No basta el error de juicio, es necesario que el error configure una violación de la Constitución para que sea procedente la inconstitucionalidad. (Casco Pagano, Hernán. Código Procesal Civil Comentado. Quinta Edición. La Ley Paraguaya. Año 2004. Pág. 1029)

  
**Dr. ANTONIO FRETES**  
Ministro

  
**Dra. Gladys Bareiro de Mónica**  
Ministra

  
**Miryam Peña Candia**  
MINISTRA C.S.J.

  
**Abog. Julio C. Pavón Martínez**  
Secretario



impugnada y, posteriormente, por los fallos atacados. -----

En efecto, la accionante acudió al órgano jurisdiccional peticionando la inaplicabilidad del artículo 24 de la Ley N° 3441, en atención a que su representado, el Señor Cosme Vera -quien estaba siendo atendido en el hospital demandado por su grave estado de salud- profesa la religión denominada “*Testigos de Jehová*” y, en virtud al ejercicio de su derecho a la libertad religiosa e ideológica, se opone al tratamiento médico de transfusión de sangre. -----

Al respecto, sostuvo que la disposición contenida el artículo 24, segundo párrafo de la Ley N° 3441 “De Sangre”, “...amedrenta derechos legítimos y primarios de la dignidad de la persona como paciente, en cuanto a aceptar o rechazar, mediante consentimiento informado, la terapia transfusional...”. -----

Por su parte, el personal médico del hospital demandado, consideró “...En consecuencia y en vista a la gravedad de las lesiones enunciadas y la alta complejidad, que podría poner en peligro de muerte en cirugía y/o cualquier intervención, el mismo necesitará transfusión sanguínea”. -----

El artículo, en la parte impugnada, reza como sigue: “...Cuando la transfusión de sangre es considerada de importancia vital para la conservación de la vida del paciente, ninguna persona podrá oponerse a la operación, so pena de incurrir en responsabilidad penal”. -----

En consecuencia, la situación brevemente descrita indica que nos hallamos, en rigor, ante un conflicto de derechos de rango fundamental, teniendo por un lado al derecho a la libertad religiosa y por otro al derecho vida, ambas normadas en los artículos 24 y 4 de la Constitución Nacional, respectivamente. Resta por determinar entonces, si –en el caso concreto– existe o no algún grado de prevalencia entre los mismos y en su caso, si es factible el ejercicio simultaneo de ambos. -----

Al respecto, debo afirmar que este tipo de análisis, en general, presenta no pocas dificultades pues, en puridad, se trata de delimitar el ejercicio de ciertos derechos en función a hacer operativos otros. Norberto Bobbio, en “*El tiempo de los derechos*” afirma: “En la mayor parte de las situaciones en las que está en cuestión un derecho humano ocurre que dos derechos igualmente fundamentales se enfrentan y no se puede proteger uno incondicionalmente sin hacer inoperante el otro. (...) En estos casos, que son la mayor parte, se debe hablar de derechos fundamentales no absolutos sino relativos, en el sentido de que su tutela encuentra en un cierto punto un límite insuperable en la tutela de un derecho también fundamental pero concurrente. Y puesto que es difícil de establecer y siempre es materia opinable cuál es el punto en que uno termina y comienza el otro, la delimitación del ámbito de un derecho fundamental del hombre es extremadamente variable y no puede ser de una vez para siempre establecida”<sup>2</sup>. -----

Retomando el análisis de la pretensión, al expresar la norma atacada que en casos de *importancia vital* nadie puede oponerse a la transfusión, resulta claro que la disposición responde a la protección del derecho a la vida, que en el artículo 4 de la Constitución Nacional se garantiza en estos términos: “*DEL DERECHO A LA VIDA. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos*”. En efecto, no se observa colisión entre la norma de menor rango con la disposición constitucional. La redacción literal, la disposición y el espíritu del artículo 24 de la *Ley de Sangre* no vulnera el principio de supremacía constitucional prescripto en el artículo 137 de la norma fundamental ni se opone a lo en ella establecido<sup>3</sup>. En

<sup>2</sup> Bobbio, Norberto – El tiempo de los derechos. Sistema. Año 1991. Pág. 80. Obra citada por Mendonca, Daniel – Derechos, razón y emoción. Conflicto y Balance de Derechos. Año 2016. Pág. 13.

<sup>3</sup> Artículo 137. DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION. La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución.





ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:  
"PROMOVIDA POR JEIMNY PAMELA VERA  
MARTINEZ EN REPRESENTACION DE COSME  
VERA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JEIMNY  
PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION  
DEL SR. COSME VERA C/ HOSPITAL DE TRAUMA  
"PROF. DR. MANUEL GIAGNI" S/ AMPARO". AÑO:  
2018 – N.º 2107.-----

RECIBIDO  
30 DIC. 2019  
Rocío López  
S.P.S.P.J.

rigor, como se ha observado, la disposición del artículo de ley atacado responde a la protección de la vida y, a fin de hacerla operativa, la norma advierte que la oposición a la realización de la transfusión generará responsabilidad penal. -----

Por otra parte, el derecho que el accionante afirma fue vulnerado, se halla establecido en el artículo 24 de la Constitución Nacional, que reza como sigue: "DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA IDEOLÓGICA. Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial. Las relaciones del Estado con la iglesia católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía. Se garantizan la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las impuestas en esta Constitución y las leyes. Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología". Cabe acotar, entonces, que para la parte accionante constituye una violación de su libertad religiosa el hecho de que, pese a sus convicciones y la negativa formulada, se haya procedido a practicarle la transfusión sanguínea. Se infiere que considera vulnerado su derecho en cuanto la disposición constitucional expresa que *nadie puede ser molestado* por causa de sus creencias. -----

Del escenario descrito y la proposición más arriba señalada, a fin de determinar la prevalencia de algún derecho sobre otro, resulta imperativo indicar que cualquiera sea la conclusión a la que se arribe en la solución de conflicto de derechos como el presente, en ningún caso dicha solución puede ser interpretada como negación de otros derechos, conjunta y previamente establecidos. -----

El conflicto supone, en general, que el ejercicio de un derecho implica la lesión de otro que debiera ejercerse simultáneamente. En rigor, este conflicto de derechos conlleva la necesidad de determinar que uno deberá primar frente al otro. Daniel Mendonca, afirma, con certeza, que "...la mayoría de los juristas acepta que cuando dos derechos entran en conflicto, uno de ellos debe prevalecer sobre el otro. Esto no significa, sin embargo, considerar inexistente (como no consagrado) el derecho no prevalente. Lo que sucede, más bien, es que, bajo ciertas circunstancias, uno de los derechos precede en importancia al otro, aunque bajo circunstancias diferentes la cuestión de la precedencia pueda ser resuelta de manera distinta o inversa. Esto es, básicamente, lo que quiere decirse cuando se afirma que un derecho prevalece sobre otro (o que pesa más que otro)"<sup>4</sup>. -----

Siguiendo la línea que el autor indica, las situaciones del caso referidas, me llevan a concluir que, vista las circunstancias dadas y puntualmente a los derechos en pugna, en definitiva, debe primar el derecho a la vida del Señor Cosme Vera, frente a su igualmente constitucional derecho a la libertad religiosa. -----

La norma fundamental, en el artículo 4 transcrito supra, avala esta posición, pues califica al derecho a la vida como *inherente a la persona humana*, lo cual implica que éste derecho no puede ser vulnerado, obviado o cedido ni en cabeza de su titular. La inherencia supone pues, por su naturaleza, que algo se halla unido de manera tal que no puede separarse o abstraerse. -----

En tal sentido, la citada disposición constitucional determina que toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y es, justamente, en cumplimiento de ese mandato constitucional que los órganos del Estado, en este caso, el Congreso, dicta leyes como la que en el presente caso se impugna, estableciendo que, en la hipótesis de hallarse una persona en inminente peligro de muerte, deberá

<sup>4</sup>Mendonca, Daniel – Derechos, razón y emoción. Conflicto y Balance de Derechos. Año 2016. El autor. Pág. 34.

Dr. ANTONIO FRETES  
Ministro

Dra. Gladys Bareiro de Mónica  
Ministra

Miryam Peña Candia  
MINISTRA C.S.J.

Abog. Julio C. Pavón Martínez  
Secretario



salvaguardarse la vida procediéndose incluso a técnicas o mecanismos proporcionados por las ciencias médicas. -----

En un fallo reciente y en caso similar, la Corte Suprema ha establecido que “*el derecho a la autonomía del paciente debe ser respetado en tanto y en cuanto no nos encontremos ante una hipótesis de gravedad extrema o peligro inminente de muerte, en cuyo caso, el derecho a la vida prevalecerá por expresa disposición del art. 4 de nuestra Ley fundamental...*”<sup>5</sup>. -----

Como corolario, comparto en absoluto la opinión del jurista Sagüés, en el sentido de que el derecho a la vida, de existir un catálogo de derechos, debiera de ubicarse en el primer lugar, pues en rigor, la vida “*se trata de un derecho constitucional fundante y personalísimo, ya que posibilita el ejercicio de todos los demás derechos*”<sup>6</sup>. -----

En consecuencia, en atención a la disposición constitucional normada en el artículo 4 y a las consideraciones propias del caso, el derecho a la vida prevalece sobre el derecho a la libertad religiosa e ideológica normada en el artículo 24 de la norma fundamental, razones que me llevan a concluir de igual manera, que la previsión legal del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley N° 3441 “De Sangre” no es inconstitucional. -----

Seguidamente, conforme a la conclusión arribada y, establecida la prevalencia del derecho a la vida frente a otros derechos, corresponde el análisis de la segunda pretensión, la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones judiciales. -----

La S.D. N° 295 de fecha 23 de julio de 2018, dictada en Primera Instancia, resolvió: “*I.- NO HACER LUGAR a la acción constitucional de amparo promovida por la Sra. JEIMMY PAMELA VERA MARTÍNEZ, en contra del HOSPITAL DEL TRAUMA “PROF. DR. MANUEL GIAGNI”, así como la medida cautelar solicitada, de conformidad con las consideraciones expuestas en el exordio de la presente resolución. - II.- IMPONER las costas en el orden causado, en atención a los motivos señalados en el considerando. - ANOTAR...*”. -----

El Acuerdo y Sentencia N° 38 del 08 de agosto de 2018 dictado por el Tribunal resolvió: “*1. Declarar desierto el recurso de nulidad. 2. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la accionante, y en consecuencia, 3. Confirmar in totum la S.D. N° 295 de fecha 23 de julio de 2018, dictada por el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial del 20° Turno. 4. Imponer costas a la perdedora. 5. Anotar...*”. -----

La parte accionante afirma que las resoluciones impugnadas violan los arts. 1, 4, 24, 33, 37, 45, 46, 134y 256 de la Constitución Nacional, sosteniendo principalmente que “*...ambos decisorios reflejan un apartamiento relevante de la legislación invocada, prescindiendo del texto legal sin dar razón plausible alguna. Además, hacen afirmaciones dogmáticas que sólo constituyen fundamento aparente, siendo autocontradictorios en el establecimiento del fundamento normativo, el fundamento de hecho y el arribo de ambos a la conclusión. Por lo tanto, las sentencias desembocan en conclusiones arbitrarias...*”. -----

Por providencia de fecha 05 de marzo de 2019 se corrió traslado a la parte accionada, Hospital del Trauma “Prof. Dr. Manuel Giagni”, quien no contestó el traslado, razón por la cual se dio por decaído su derecho para hacerlo, conforme providencia de fecha 25 de abril de 2019. -----

La Fiscal Adjunto, Abg. Gilda Villalba Tottit se expidió, se expidió conforme a los términos del Dictamen N° 1332 del 06 de junio de 2019, donde consideró que la acción planteada debe ser rechazada, en atención a que, principalmente, la accionante pretende la nulidad de las decisiones y a ese fin cuestiona el razonamiento de los juzgadores exponiendo, en rigor, su divergencia con la interpretación dada por los mismos, no pudiendo esto ser objeto de revisión constitucional, ya que el carácter excepcional de esta acción procede en casos de ostensible violación de normas, principios, derechos o garantías de rango constitucional. -----

Opino que no procede la acción de inconstitucionalidad planteada contra dichos fallos. De la atenta lectura de las resoluciones impugnadas surge que las mismas han sido dictadas tras un examen detenido y

<sup>5</sup>Corte Suprema de Justicia – Sala Constitucional. Acuerdo y Sentencia N° 683 del 13 de agosto de 2019.

<sup>6</sup>Sagüés, Néstor Pedro– Manual de Derecho Constitucional. Astrea. Año 2014. Pág. 552





# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:  
"PROMOVIDA POR JEIMNY PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION DE COSME VERA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JEIMNY PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION DEL SR. COSME VERA C/ HOSPITAL DE TRAUMA "PROF. DR. MANUEL GIAGNI" S/ AMPARO". AÑO: 2018 - N.º 2107.

razonado de los extremos fácticos y legales del caso, sin que se observe en ellas violaciones a principios o derechos de jerarquía constitucional. En efecto, ambas decisiones se encuentran suficientemente motivadas y fundadas, siendo producto de una interpretación razonable, primero, de la norma fundamental y luego, de las leyes pertinentes y es igualmente el resultado de una valoración razonable de los hechos acreditados en autos. La a quo consideró que el tratamiento empleado por la parte demandada, Hospital del Trauma, fue consecuencia de la urgencia en salvaguardar la vida del paciente que se hallaba en estado crítico, y que tal tratamiento no puede estimarse como violatorio del derecho a la libertad religiosa, a la dignidad, a la intimidad y a la igualdad, pues la finalidad de los médicos tratantes se circunscribió a precautelar el derecho de mayor rango, cual es, constitucionalmente, el derecho a la vida. El Ad-quem, por su parte, al confirmar el fallo recurrido, advirtió que el derecho a la vida tiene prevalencia sobre los demás derechos y que debe ser protegido en primer lugar, ya que, sin el primer derecho, no es posible el ejercicio de los demás. Puntualmente, ha entendido que los derechos reclamados por la parte actora no son absolutos, pues encuentran restricciones y limitaciones cuando se anteponen a la obligación de salvaguardar la vida siendo éste el bien jurídico de mayor prevalencia.

Igualmente, debemos recordar que, en principio la acción de inconstitucionalidad no puede ser utilizada para cuestionar la interpretación y valoración realizadas por los magistrados inferiores siempre que dichas tareas se encuadren dentro de ciertos parámetros razonables que impidan calificarlas de arbitrarias. --

La Sala Constitucional no puede ligeramente anular resoluciones judiciales, salvo que resulte evidente en ellas transgresiones de orden constitucional que justifiquen una decisión en ese sentido, las cuales no son advertidas en el presente caso.

La argumentación de los magistrados intervinientes, explicitada más arriba, no ofrece reparos desde el punto de vista lógico ni jurídico. Los mismos estudiaron a conciencia el conflicto sometido a su jurisdicción y lo resolvieron teniendo en cuenta la norma fundamental y el derecho prevalente. En consecuencia, la discrepancia que pudiera tener la parte accionante con lo resuelto, no constituye sustento suficiente para una acción de esta índole.

Así, analizadas las resoluciones tachadas de inconstitucionales, no advierto vicios en las mismas que pudieran invalidarlas y, en lo que respecta a la arbitrariedad, cabe señalar que las decisiones cuestionadas tienen adecuada fundamentación jurídica y minucioso análisis de los hechos alegados por las partes, de lo que se deduce la no existencia de arbitrariedad en las decisiones. Para que sea viable la arbitrariedad el fallo debe tener una ausencia total de fundamentación legal o cuando se comprueba que los Juzgadores se han apartado de la solución jurídica prevista para el caso planteado. Por estas consideraciones, opino que las resoluciones impugnadas no violan normas constitucionales, correspondiendo el rechazo de la pretensión. --

Por las consideraciones que anteceden, la acciones de inconstitucionalidad planteadas contra el artículo 24, segundo párrafo de la Ley N° 344, la S.D. N° 295 de fecha 23 de julio de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno de la Capital, y el Acuerdo y Sentencia N° 38 del 08 de agosto de 2018 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala de la Capital, en los autos caratulados: "Jeimny Pamela Vera Martínez en representación del Sr. Cosme Vera c/ Hospital del Trauma "Prof. Dr. Manuel Giagni" s/ Amparo", deben ser rechazadas. Es mi voto.

A su turno la Doctora **PEÑA CANDIA** dijo: Disiento respetuosamente de lo opinión de colega que

Dr. ANTONIO FRETES  
Ministro

Dra. Gladys Bareiro de Mónica  
Ministra

Miryan Peña Candia  
MINISTRA C.S.J.

Abog. Julio C. Pavón Martínez  
Secretario



me antecedió en el orden de voto, pues considero que debe hacerse lugar “parcialmente” a la acción de inconstitucionalidad. A continuación expondré en detalle mi postura sobre la cuestión que hoy nos ocupa para luego, finalmente en el párrafo 17, cerrar con mi conclusión sobre el caso concreto.-----

2. El presente caso judicial se originó porque el Sr. Cosme Vera sufrió un accidente en Coronel Oviedo y a causa del mismo fue derivado en estado grave de Salud al Hospital del Trauma “Prof. Dr. Manuel Giagni”. El Sr. Cosme Vera es miembro de la comunidad religiosa “Testigos de Jehová” y había firmado un formulario de “Directivas Anticipadas y Designación de un Representante para la Atención de la Salud”, en el cual expresamente manifestó su voluntad en el siguiente sentido: *Soy testigo de Jehová y NO ACEPTO TRANSFUSIONES de sangre completa, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma bajo ningún concepto, aunque el personal médico las crea necesarias para salvarme la vida [...]* *No autorizo a nadie (ni a mi representante) a que pase por alto las instrucciones aquí expuestas. Puede que mi familia inmediata o ciertos parientes o amigos discrepen de mi postura, pero ello no le resta fuerza o solidez a mi rechazo de la sangre ni a las demás instrucciones que he dado.* Asimismo, por medio del mismo formulario y bajo las indicaciones expuestas, designó como su representante a su hija Jeimni Pamela Vera Martínez. Cuando el Sr. Cosme Vera ingresó al Hospital del Trauma, su actual esposa María Martínez de Vera y su otro hijo Néstor Vera Martínez también manifestaron verbalmente a los médicos la voluntad del Sr. Cosme Vera de no recibir ninguna transfusión de sangre y de ser tratado con tratamientos alternativos. Sin embargo, pese a la voluntad expresamente manifestada por escrito por el Sr. Cosme Vera y verbalmente por su esposa y sus hijos, los médicos le realizaron transfusiones de sangre por considerar que su estado era grave y que los tratamientos alternativos no surtirían efectos rápidamente. Ante esta situación, Jeimni Pamela Vera Martínez, hija del Sr. Cosme Vera y quien fue designada por él como su representante, promovió una acción de amparo para que se respete la voluntad de su padre a no recibir transfusiones de sangre y ser tratado con tratamientos alternativos. En el marco de este amparo, también opuso una excepción de inconstitucionalidad en contra del Art. 24 de la Ley 3.441 “De Sangre”.-----

3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno de la Capital rechazó el amparo por medio de la **S.D. N° 295 de fecha 23 de julio del 2018**, fundamentando —esencialmente— que un presupuesto del amparo es la existencia de una lesión a derechos consagrados en la Constitución Nacional, y que este presupuesto no se daba en el caso, porque los médicos actuaron solo para salvar la vida del Sr. Cosme Vera y que en este sentido, el derecho a la vida pesa más que los derechos constitucionales cuya lesión el Sr. Cosme alegó. Esta decisión fue confirmada en todas sus partes por medio del **Ac. y Sent. N° 38 de fecha 8 de agosto del 2018**, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sexta Sala de la Capital con similar fundamento.-----

4. Ante esta situación, la Sra. Jeimni Pamela Vera, por medio de su abogado Abigail Irene Alonso Ortega, ha promovida acción de inconstitucionalidad en contra de ambas resoluciones mencionadas, es decir, en contra de la **S.D. N° 295 de fecha 23 de julio del 2018** y en contra del **Ac. y Sent. N° 38 de fecha 8 de agosto del 2018**. Asimismo, en el marco de la acción también ha impugnado el Art. 24 de la Ley 3.441 “De Sangre”. La recurrente alega que estas resoluciones y la citada disposición legal violan varios derechos del Sr. Cosme Vera, como la libertad de culto y de conciencia, el derecho de la igualdad ante la ley, el derecho a elegir el tratamiento médico, y el principio de dignidad humana.-----

5. Los agravios expuestos por la Sra. Jeimni Pamela Vera no son únicos en su especie, pues no son pocos los casos de personas integrantes de la comunidad religiosa “Testigos de Jehová” que deben llegar a estrados judiciales para hacer valer su deseo a no recibir una transfusión de sangre. -----

6. En casos como el que nos ocupa, normalmente existe un apresuramiento en entender que el objeto de discusión radica en determinar si debe o no respetarse el deseo de una persona a morir por sus creencias. Este entendimiento, sin embargo, solo puede surgir de un análisis simplista y superfluo de la cuestión. Si una persona de la comunidad religiosa testigos de Jehová rechaza la transfusión de sangre, **pero al mismo tiempo acepta y/o solicita un tratamiento médico alternativo existente** (como ocurrió en el presente caso), no está solicitando entonces que se la deje morir por sus creencias, sino más bien **que se la deje elegir el tratamiento de su afección**. En realidad, el problema que esta postura genera es que los médicos intervinientes, apoyándose en su formación profesional, consideran que los tratamientos





ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:  
"PROMOVIDA POR JEIMNY PAMELA VERA  
MARTINEZ EN REPRESENTACION DE COSME  
VERA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JEIMNY  
PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION  
DEL SR. COSME VERA C/ HOSPITAL DE TRAUMA  
"PROF. DR. MANUEL GIAGNI" S/ AMPARO". AÑO:  
2018 - N.º 2107.

alternativos propuestos por los testigos de Jehová no son los métodos más adecuados para mejorar su salud y preservar su vida, y es por ello que insisten en proporcionar el "único" tratamiento que los testigos de Jehová rechazan: la transfusión de sangre.

7. Lo que agravia entonces a los miembros de la comunidad religiosa testigos de Jehová (como en este caso concreto al Sr. Cosme Vera), no es la intención o buena voluntad de los médicos de tratarlos para preservar su vida, sino más bien que, siendo ellos (los testigos de Jehová) personas adultas, responsables, y con pleno discernimiento de las consecuencias de sus actos, los médicos no les dejen "elegir" el tratamiento que se les va a suministrar, tratando de imponerles de forma unilateral —pisoteando sus convicciones y su voluntad— un tratamiento que finalmente afectará solo y únicamente a "su" cuerpo.

8. El derecho que los testigos de Jehová pretenden reivindicar se denomina "derecho de autodeterminación del paciente". Este derecho comprende la libertad del paciente a declinar cualquier intervención médica que solo le afecta a él, y a elegir en su caso un tratamiento alternativo si lo desea. Asimismo, es por la existencia de este derecho a "elegir" del paciente que existe también el llamado "deber de información del médico", según el cual quien quiera llevar a cabo un tratamiento médico, está obligado a informar siempre al paciente acerca del modo, la importancia y las consecuencias posibles del tratamiento y su omisión, de manera que este (el paciente) pueda tomar una decisión verdaderamente libre y consciente. Si no fuera necesario tener en cuenta la voluntad y el deseo del paciente, entonces el deber de información sería superfluo.

8.1. El derecho de autodeterminación del paciente comprende un aspecto específico de la "libertad personal" pues, finalmente, se refiere a la libertad de las personas a decidir sobre su propio cuerpo.

La existencia de esta libertad específica se encuentra reconocida por nuestra Constitución principalmente en su Art. 4 en la parte que establece, que *toda persona será protegida por el Estado su integridad física y psíquica*, y que *la ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos* (las negritas y el subrayado son míos). Al establecer este artículo que la ley reglamentará la "libertad de las personas para disponer de su cuerpo solo para ciertos casos", nuestra Constitución, en primer lugar está reconociendo de manera expresa que las personas gozan de este específico derecho de libertad, y en segundo lugar de manera implícita que, dicha libertad, por regla general, no puede ser limitada (esto surge de la inclusión en el texto del adverbio "solo"). La excepción a esta regla que permite la reglamentación de la utilización del cuerpo para fines científicos o médicos debe entenderse como una limitación para la propia persona titular del bien jurídico, en el sentido de que cuando esta desee utilizar su cuerpo para ciertas actividades como los de donación **voluntaria** de órganos o sangre a otras personas, o su sometimiento a prueba de nuevos medicamentos o tratamientos médicos, aun cuando tenga la libertad para hacerlo, la ley podrá establecer de que manera lo hará. Es decir, la frase *la ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos*, no constituye una autorización para el Estado o para terceros para intervenir en el cuerpo de otro en contra de su voluntad, sino más bien una reserva que permite regular actividades que una persona activa y voluntariamente desea realizar con su cuerpo.

8.2. El ejercicio del derecho de autodeterminación del paciente sirve además en algunos casos como un medio para ejercer la libertad de expresión de la personalidad e identidad, derecho que también se encuentra consagrado en nuestra Constitución en su Art. 25. Esto es así, porque las personas también expresan su personalidad e identidad a través del cuerpo, como por ejemplo a través de su vestimenta, corte

Dr. ANTONIO FRETES  
Ministro

Dra. Gladys Bareiro de Mónica  
Ministra

Miryam Peña Candia  
MINISTRA C.S.J.

Abog. Julio G. Pavón Martínez  
Secretario



de pelo, tatuajes, accesorios, etc. Con la libertad de religión y de culto, consagrada en el Art. 24 CN, ocurre lo mismo, ya que también pueden expresarse las creencias religiosas a través de los ejemplos citados. El declinar un tratamiento médico u optar por tratamientos alternativos, no son más que ejemplos de los citados, y prueba de ello son las intervenciones médicas estéticas, la realización de ciertos procedimientos por meros motivos religiosos (como la circuncisión), e incluso casos como el que nos ocupa: la negativa a recibir una transfusión de sangre por motivos religiosos.-----

**8.3.** Finalmente, el derecho de autodeterminación del paciente debe también ser considerado como una expresión de la dignidad humana, principio que impregna nuestra Constitución ya desde su preámbulo. Este principio exige que se contemple al ser humano no simplemente como un mero ser vivo (al cual podrían equipararse los seres del reino vegetal), sino como un ser vivo racional, consciente de su propia existencia, libre por naturaleza, con capacidad suficiente para tomar sus propias decisiones, y con capacidad para relacionarse y cooperar con otros individuos de su misma especie. Que nuestra Constitución reconoce al ser humano como una unidad indivisible que reúne todos estos atributos, surge ya de su mismo Art. 4, que si bien consigna como acápite “Del Derecho a la Vida”, luego incluye en el mismo artículo, al mismo tiempo y de forma conjunta, el derecho a la integridad física, a la autodeterminación sobre el cuerpo, al honor y a la reputación. En este contexto, el reconocer a una persona el derecho a declinar un tratamiento médico u optar por uno alternativo –tenga o no esta persona conocimientos de medicina– es un reconocimiento de su dignidad como ser humano, pues se está reconociendo su capacidad de tener consciencia sobre las consecuencias de sus actos y su libertad para tomar las decisiones sobre su destino. Es por esto que, en adición a los fundamentos dados en los párrafos precedentes, considero que el derecho de autodeterminación del paciente es un derecho inherente a la persona humana, y por tanto también puede ser considerado como reconocido y protegido en virtud al Art. 45 de nuestra Constitución Nacional.-----

**9.** Ahora, más de uno de los que lea las últimas líneas podría cuestionar que la decisión del paciente, de declinar un tratamiento y en su caso optar por uno alternativo, puede ser inadecuada desde el punto de vista de la experiencia médica (de hecho, es esta opinión la que subyace en casos como el que nos ocupa, pues los médicos acuden a tribunales mediante amparos para conseguir una autorización judicial para realizar la transfusión de sangre, precisamente porque consideran que los tratamientos alternativos propuestos por los testigos de Jehová no son los más adecuados para mejorar su estado de salud). Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico ya tomó postura sobre este cuestionamiento a través de la inclusión en el Código Penal del Art. 123 que prevé el delito de “tratamiento médico sin consentimiento”, y que tiene por fin precisamente proteger el derecho de autodeterminación del paciente.-----

Este delito surgió de una discusión dogmática que tuvo su génesis en un caso que llegó al Tribunal del Reich de Alemania ya en el año 1894. Resumidamente, los hechos del caso consistieron en que en una menor de edad la tuberculosis se había propagado hasta los huesos del pie y los médicos llegaron a la conclusión de que una amputación era necesaria para evitar que la enfermedad se siga propagando a otras partes del cuerpo y hasta cause la muerte; el padre se había negado expresamente en varias ocasiones a la amputación y quería probar con otras terapias naturales alternativas, pero finalmente el jefe médico ignoró esta oposición y amputó el pie de la menor de edad; a causa de la intervención, el cuadro de salud de la menor mejoró. El médico que llevó a cabo la amputación fue procesado por lesión pero absuelto en las instancias inferiores al considerarse que su intervención no constituyó un maltrato corporal ni llevó a un menoscabo de la salud sino a una mejoría. Sin embargo, al llegar el caso al Tribunal del Reich, este revocó la absolución manifestando: *que alguien posea según su propia convicción o según el juicio de sus colegas profesionales la capacidad de entender el verdadero interés de su prójimo mejor que este mismo, y así a través del empleo de medios racionales e inteligentes promover sensatamente su bienestar corporal y espiritual mejor de lo que él mismo lo pueda hacer, no le otorga una suerte de permiso legal para intervenir en la esfera personal del otro a su sola discreción, violentarlo de esta forma y utilizar arbitrariamente su cuerpo como objeto de intentos curativos bien intencionados. El absurdo de semejante suposición salta con particular picantez a los ojos* (Cfr. RGSt. 25, 375). Este fue el momento en el que se reconoció por primera vez que “la libertad del paciente de rechazar un tratamiento médico” era también un derecho que debía ser respetado independientemente a la salud. En los años posteriores la discusión versó





RECIBIDO  
30 Dic. 2019  
Roque López  
S.E.P.J.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:  
"PROMOVIDA POR JEIMNY PAMELA VERA  
MARTINEZ EN REPRESENTACION DE COSME  
VERA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JEIMNY  
PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION  
DEL SR. COSME VERA C/ HOSPITAL DE TRAUMA  
"PROF. DR. MANUEL GIAGNI" S/ AMPARO". AÑO:  
2018 - N.º 2107.

sobre la mejor manera de proteger este derecho, existiendo principalmente dos posturas encontradas: una proponía la creación de un nuevo tipo penal que proteja este derecho como un bien jurídico independiente, y la otra consideraba que el nuevo bien jurídico reconocido por el Tribunal del Reich ya se encontraba suficientemente protegido por el tipo penal de lesión, debiendo castigarse por la comisión de tal delito a aquél que llevase adelante un tratamiento médico sin el consentimiento del afectado. Nuestro código penal adoptó la primera de las posturas mencionadas al tipificar en su Art. 123 el hecho punible de "tratamiento médico sin consentimiento" como un hecho punible independiente a los de lesión.

Así, como ya puede verse con el mismo caso que originó la discusión que derivó en la creación del delito previsto en el Art. 123 de nuestro código penal, el motivo por el cual una persona declina un tratamiento así como que este motivo sea irracional o incorrecto desde el punto de vista médico, es irrelevante. Lo que importa es que mientras un tratamiento médico solo afecte la esfera personal íntima de una persona, es esta persona en concreto la única que puede decidir si recibe o no el tratamiento (esta premisa por supuesto no elimina la posibilidad de ampararse en un consentimiento presunto [como el que se dio en este caso concreto] ya que esta figura también reconoce el carácter personalísimo del bien jurídico y la autodeterminación del paciente). Es por esto que con el Art. 123 de nuestro código penal se castiga a aquel que suministra un tratamiento médico a otro sin su consentimiento, aun cuando este tratamiento sea suministrado *según los conocimientos y las experiencias del arte médico*, es decir, aun cuando el tratamiento se encuentre médicamente indicado, cumpla con la *lex artis* y eventualmente tenga como resultado a una mejoría de la salud. De no ser así, se daría la situación que ya fue advertida por el Tribunal del Reich hace más de 100 años: con el fundamento de solo buscar el bienestar y poseer los conocimientos médicos y/o científicos adecuados para ello, se justificaría la realización de cualquier tipo de intervención forzosa en el cuerpo del otro, pues finalmente, se estaría actuando "en su favor". Esto me parece una flagrante violación de la dignidad del paciente, pues se lo equipara a un objeto o cuanto menos a un ente que no es capaz de ser consciente de las consecuencias de sus propios actos y de tomar sus propias decisiones.

10. Otro argumento para no respetar la voluntad de los testigos de Jehová se apoya en el entendimiento de que el segundo párrafo del Art. 24 de la Ley N.º 3.441 "De Sangre" obliga a realizar la transfusión, pues allí se establece que *cuando la transfusión de sangre es considerada de importancia vital para la conservación de la vida del paciente, ninguna persona podrá oponerse a la operación so pena de incurrir en responsabilidad penal* (las negritas son mías). Por este motivo, los testigos de Jehová (como en este caso la Sra. Jeimny Pamela Vera) también suelen alegar la inconstitucionalidad de la norma contenida en esta disposición legal.

11. La inconstitucionalidad de la disposición citada ya fue rechazada por esta Sala Constitucional por medio del **Ac. y Sent. N.º 683 de fecha 13 de agosto del 2019** dictado en el caso "Consulta constitucional en el juicio: Instituto de Previsión Social c/ María de Lourdes Gutiérrez de Amarilla s/ Amparo", en el cual se ha afirmado que el Art. 24 de la Ley N.º 3.441 no viola nuestra Constitución.

En el mencionado fallo, la mayoría de los integrantes de la Sala Constitucional para el caso concreto, apoyándose en doctrina, comenzaron a motivar su postura afirmando la prevalencia del derecho a la vida en nuestro ordenamiento jurídico, manifestando que *el derecho a la vida se vuelve así transversal a toda la dogmática constitucional paraguaya, que sitúa a la vida, en principio, como un derecho cardinal que permite el ejercicio de los demás derechos*. Luego reconocieron la existencia del derecho

Dr. ANTONIO FRETES  
Ministro

Dra. Gladys Bareiro de Mónica  
Ministra

Miryam Peña Candi  
MINISTRA C.S.J.

Abog. Julio G. Pavón Martínez  
Secretario



constitucional de autodeterminación del paciente, pero con la aclaración de que *el derecho a la autodeterminación tiene raigambre constitucional, pero como todo derecho, este no es absoluto, y es precisamente el hallazgo de sus límites la tarea más delicada del juez constitucional, quien debe ponderar los principios constitucionales involucrados. Ello, porque todo conflicto de derechos supone, en lo sustancial, que puede no ser posible ejercer un derecho sin lesionar o afectar otro, lo que implica que –en cada caso– los operadores de la justicia constitucional, deben necesariamente recurrir a la ponderación o “balancing test”* (las negritas son mías). A continuación, se refirieron al derecho a la salud consagrado en el Art. 68 CN, diciendo que *debemos tener presente también que, junto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, se sitúa el derecho a la salud consagrado en el art. 68, que, según su propio texto, impone dos obligaciones específicas a dos sujetos distintos: al Estado de asistir a las personas, y promover y proteger la salud como derecho fundamental de las mismas; y a todas las personas de someterse a las medidas sanitarias impuestas por la ley*. Finalmente, con base en estas premisas, llegaron a la conclusión de que el segundo párrafo del Art. 24 de la Ley N° 3.441 no viola nuestra constitución, afirmando que: -----

[...] *nuestra Constitución califica a la vida como un derecho inherente a la persona humana, lo que significa que este derecho es esencial y troncal en nuestro ordenamiento constitucional, sin el cual, los restantes derechos no tendrían existencia posible. Por eso, en nuestro diseño constitucional, el derecho a la vida constituye un valor indisponible para el individuo, y debe ser sustraído del ámbito de la libertad y autonomía de su titular toda vez que la vida misma de éste se ve en peligro. Por ello es que el Estado no solo tiene un interés en proteger la vida, sino una obligación, por expresa disposición de nuestra Carta Fundamental. Por eso es que la norma cuestionada, al referirse al supuesto “de importancia vital para la conservación de la vida del paciente”, se adecua plenamente a los postulados del art. 4 de la Constitución, y no puede considerarse inconstitucional.*-----

12. En mi opinión, la norma contenida en el segundo párrafo del Art. 24 de la Ley N° 3.441 es efectivamente constitucional, **pero esto no significa que pueda ser utilizada para justificar la intervención arbitraria en la esfera del paciente**, como se afirma en el fallo **Ac. y Sent. N° 683 de fecha 13 de agosto del 2019**. En este sentido, debo expresar mi respetuosa disidencia con los argumentos expuestos en el citado fallo con base en los fundamentos que explico a continuación.-----

12.1. En primer lugar, entiendo que la “ponderación” como medio para resolver la colisión de principios constitucionales, tiene como presupuesto la inexistencia de una “relación abstracta o incondicionada de precedencia” entre los principios que se consideran en colisión, es decir, para la realización de una ponderación debe partirse de que los principios en colisión tienen abstractamente el mismo peso o importancia (Al respecto, como ejemplo se puede consultar Alexy, R. [2007]. *Teoría de los derechos fundamentales* [traducida al español del original *Theorie der Grundrechte*]. 2.<sup>da</sup> ed. en español. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. pp. 71-79, en donde el autor analiza la ponderación realizada por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania en dos casos concretos). Este presupuesto tiene coherencia: en primer lugar porque si existiese una jerarquía abstracta entre los principios, entonces la colisión sería resuelta haciendo primar al principio que abstractamente tiene más peso, resultando así la ponderación innecesaria; en segundo lugar porque es precisamente la falta de esta jerarquía abstracta lo que hace necesaria la ponderación, ya que es la igual relevancia entre los principios en colisión lo que hace necesaria la ponderación para determinar cuál de los principios debe primar “en el caso concreto”.-----

En atención a esto, me parece que, si bien en parte del **Ac. y Sent. N° 683 de fecha 13 de agosto del 2019** se menciona que “ningún” derecho es absoluto y que se debe realizar una ponderación o *balancing test* para determinar cual derecho prevalece en cada caso concreto (ver más arriba la parte que he transcripto y resaltado en negritas), la decisión no fue tomada por medio de una ponderación sino por medio del establecimiento de una jerarquía abstracta de derechos en la cual se colocó a la vida como “el derecho más importante de nuestro ordenamiento jurídico”. Esto es lo que puede interpretarse del fallo cuando al inicio se expresa que *el derecho a la vida se vuelve así trasversal a toda la dogmática constitucional paraguaya, que sitúa a la vida, en principio, como un derecho cardinal que permite el ejercicio de de los demás*





ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:  
"PROMOVIDA POR JEIMNY PAMELA VERA  
MARTINEZ EN REPRESENTACION DE COSME  
VERA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JEIMNY  
PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION  
DEL SR. COSME VERA C/ HOSPITAL DE TRAUMA  
"PROF. DR. MANUEL GIAGNI" S/ AMPARO". AÑO:  
2018 – N.º 2107.

RECIDIDO  
30 dic. 2019  
Rosa López  
S. J. M. J.

derechos, y luego cuando en la conclusión se expresa que no hay inconstitucionalidad porque *nuestra Constitución califica a la vida como un derecho inherente a la persona humana, lo que significa que este derecho es esencial y troncal en nuestro ordenamiento constitucional, sin el cual, los restantes derechos no tendrían existencia posible*. Si realmente se hubiese hecho una ponderación, entonces se tendría que haber partido de la igualdad de importancia o peso del derecho a la vida y los demás principios en juego en el caso concreto.

Ahora, por supuesto se puede defender que existe un orden de jerarquía abstracto de principios constitucionales en el cual el derecho a la vida tiene un rango superior a todos los demás como por ejemplo la dignidad, la libertad, la integridad física, etc. Sin embargo, si se va a defender esta postura y se va a ser coherente y consecuente con la misma (que es lo que se espera de los órganos jurisdiccionales), uno debe estar dispuesto a asumir las consecuencias: considerar que existe una jerarquía abstracta de derechos constitucionales en la cual el derecho a la vida tiene siempre superioridad, conlleva a que todos los casos en los cuales exista una colisión con otros principios constitucionales, independientemente a cuales sean las circunstancias fácticas que den lugar a la colisión, siempre deberá darse prevalencia a la protección de la vida por ser el principio de mayor rango. En este sentido, con base en la postura mencionada se debería mantener con vida artificialmente en contra de su voluntad y a toda costa, a un enfermo terminal que se encuentre sufriendo terriblemente, aun cuando ya no existan pronósticos positivos de mejoría y aun cuando ni él ni sus familiares tengan los medios económicos para solventar los gastos médicos; en este caso, el mantenimiento artificial de la vida (que significa evitar que la enfermedad siga su curso y desenlace natural) estaría justificado porque la vida es más relevante que la integridad física (representada por el terrible sufrimiento físico que produce la enfermedad), que la dignidad (representada por las pésimas condiciones y calidad de vida debido a la enfermedad) y por supuesto, que la libertad de autodeterminación del paciente (representada por el deseo de la persona a no recibir más tratamientos médicos que alarguen su sufrimiento). Asimismo, también podría justificarse la tortura de sospechosos de un atentado cuando su declaración podría servir para salvar la vida de las posibles víctimas, ya que aquí también la vida pesaría más que la integridad física del sospechoso o su derecho a no autoincriminarse. En todos estos casos, la decisión ya estaría tomada de antemano sin necesidad de ponderación alguna debido a la prevalencia del bien jurídico vida.

12.2. Por otra parte, comparto la existencia de una "indisponibilidad" del bien jurídico vida, mas no en el sentido que se sostiene en **Ac. y Sent. N° 683 de fecha 13 de agosto del 2019**. Cuando en este fallo se afirma que *en nuestro diseño constitucional, el derecho a la vida constituye un valor indisponible para el individuo, y debe ser sustraído del ámbito de la libertad y autonomía de su titular*, se está asumiendo que debido a la "indisponibilidad" de la vida, la persona no puede decidir si quiere o no vivir, convirtiéndose así a la vida en una suerte de bien jurídico colectivo, con lo cual se justificaría que un tercero pueda intervenir en la esfera personalísima del otro y obligarlo a vivir en contra de su voluntad. Sin embargo, creo que esta concepción confunde la "indisponibilidad" con la "irrenunciabilidad" del bien jurídico vida. La indisponibilidad de la vida (que puede extraerse de la existencia del Art. 106 CP) simplemente implica que una persona, aun siendo titular de su vida, tiene vedado disponer que otra persona pueda intervenir en su esfera personalísima y menoscabe activamente su vida (Cfr. Jakobs, G. [1999]. *Suicidio, eutanasia y derecho penal* [traducido al español por Muñoz Conde, F. & García Álvarez, F.]. Valencia: Tirant lo Blanch. pp. 41-44; Weigend, T. [1986]. *Über die Begründung der Straflosigkeit bei Einwilligung des*

Dr. ANTONIO FRETES  
Ministro

Dra. Gladys Bareiro de Mónica  
Ministra

Miryam Peña Candia  
MINISTRA C.S.J.

Abog. Julio C. Pavón Martínez  
Secretario



Betroffenen. *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, Vol. 98. p. 56 con más citas). La indisponibilidad del bien jurídico vida sin embargo no conlleva, como se asume en el fallo **Ac. y Sent. N° 683 de fecha 13 de agosto del 2019**, que la persona no pueda renunciar a vivir, ya que esto implicaría que la vida no es un derecho, sino una obligación. Tal idea (que existe una obligación de vivir) ha sido efectivamente defendida en el pasado llegándose a sostener la prohibición del suicidio, apoyándose en argumentos de tinte autoritario como que *quien entra a formar parte del Estado, compromete sus capacidades con él y actúa antijurídicamente cuando las roba arbitrariamente a través del suicidio* (Feuerbach [1832], citado por Jakobs. *Ibidem*. p. 26) o en argumentos de tinte religioso como que *la vida es un don de Dios y por ello resulta “evidente que el hombre no tiene el dominio sobre su propia vida y no puede ponerle término a voluntad”* (Pufendorf [1673], citado por Jakobs, G. [1999]. *Ibidem*. p. 29). Estos argumentos sin embargo no encuentran cabida en nuestro ordenamiento jurídico, ya que nuestra Constitución, sobre la cual se construye nuestro ordenamiento jurídico, se ha establecido con el fin de **asegurar la libertad de las personas** (ver el Preámbulo de nuestra CN), constituyendo al Estado como uno social de derecho (CN Art. 1), sin una religión oficial (CN Art. 24), y estableciendo que la conducta de las personas, mientras no afecte al orden público y los derechos de terceros, debe estar exenta de autoridad (CN Art. 33). En este contexto, lo que debe guiar a la consideración de la vida como derecho u obligación, son los preceptos constitucionales basados en los principios mencionados, y de acuerdo a ellos, como bien establece en el acápite de su Art. 4, la vida se reconoce y protege como un “derecho” y no como una obligación (la existencia del Art. 108 CP tampoco podría ser utilizada para argumentar lo contrario, no solo porque dicha disposición tiene un rango inferior al de la constitución, sino también porque dicha norma se dirige a terceros y no al titular de la vida). La esencia de un “derecho” es precisamente la libertad y potestad de su titular de ejercerlo o no, y por tanto, siendo la vida un derecho y no una obligación, queda en manos de su titular la decisión de seguir o no viviendo, sin que nadie pueda obligarlo a este respecto, pero al mismo tiempo sin que nadie pueda intervenir en la ejecución de dicha decisión (es esto a lo que se refiere la indisponibilidad).-----

**12.3.** Finalmente, de lo anterior también surge que no existe colisión de principios o derechos como se afirma en el fallo **Ac. y Sent. N° 683 de fecha 13 de agosto del 2019**. Una colisión entre dos derechos implica que ninguno de los dos puede ser ejercido sin afectar o menoscabar al otro, con lo cual se hace necesario determinar cuál es el que tiene prevalencia en un caso concreto. En el caso de que una persona decline un tratamiento médico y eventualmente elija uno alternativo que –al menos según la opinión médica– ponga su vida en riesgo, no existe colisión, ya que ambos derechos en juego (la vida y el derecho de autodeterminación del paciente) corresponden a la misma persona, teniendo esta la libertad de ejercer uno u otro derecho; en este sentido, al tener la persona la libertad para ejercer ambos derechos, la elección de uno sobre otro no puede ser considerada como un menoscabo del derecho que se pone en segundo plano.-----

Tampoco existe colisión con respecto al Art. 68 CN. En el **Ac. y Sent. N° 683 de fecha 13 de agosto del 2019** se afirma que el Art. 68 CN establece dos obligaciones a dos sujetos distintos: *al Estado de asistir a las personas, y promover y proteger la salud como derecho fundamental de las mismas; y a todas las personas de someterse a las medidas sanitarias impuestas por la ley*. Con afirmar que el Estado tiene la obligación de asistir a las personas y promover y proteger su salud, entiendo que se ha querido afirmar –aunque sea implícitamente– que el Estado tiene la obligación de proteger la vida, la que es imprescindible para gozar de salud; esto a su vez implicaría, que el Estado tiene la obligación de mantener con vida a los ciudadanos. Con este entendimiento, se podría afirmar que ante la negativa de una persona a recibir un tratamiento médico que pone en riesgo su vida, podría existir una colisión entre el derecho de autodeterminación de la persona y la obligación del Estado de asegurarle la vida; esta idea sin embargo no tiene en cuenta que la obligación del Estado de proteger la vida de los ciudadanos, al ser establecida a favor de los mismos, cesa en el momento en ellos desiste de dicha protección. Por su parte, en lo que respecta a las “medidas sanitarias” impuestas obligatoriamente a los ciudadanos, las mismas se refieren a medidas “higiénicas” establecidas para la protección de la salud pública, pues el incumplimiento de las mismas por parte de una persona es susceptible de afectar negativamente a la salud de los demás, sobrepasando así la





**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:  
"PROMOVIDA POR JEIMNY PAMELA VERA  
MARTINEZ EN REPRESENTACION DE COSME  
VERA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JEIMNY  
PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION  
DEL SR. COSME VERA C/ HOSPITAL DE TRAUMA  
"PROF. DR. MANUEL GIAGNI" S/ AMPARO". AÑO:  
2018 – N.º 2107.**

cuestión la esfera personal de un ciudadano para convertirse en una cuestión de interés público; en este contexto, la obligación de recibir una transfusión de sangre para mantenerse con vida no es una medida sanitaria y además, su negativa no tiene la susceptibilidad de afectar la vida de terceros, teniendo esto nuevamente como resultado que no exista una colisión de principios o derechos.

**13. Por tanto, no pueden ser los fundamentos expuestos en el Ac. y Sent. N.º 683 de fecha 13 de agosto del 2019 los motivos de la constitucionalidad de la norma contenida en el segundo párrafo del Art. 24 de la Ley N.º 3.441, sino el motivo que se expone a continuación.**

**14. El motivo de la constitucionalidad en realidad es uno mucho más simple, y consiste en que la norma contenida en el Art. 24 de la Ley N.º 3.441 no está dirigida, ni es oponible, a los pacientes.** Esto ha sido correctamente reconocido por el Tribunal de Apelaciones Civil y Comercial 4.<sup>ta</sup> Sala de la Capital en el **Ac. y Sent. N.º 83 de fecha 27 de agosto del 2019**, dictado en el marco del mismo caso en que la Sala Constitucional dictó el **Ac. y Sent. N.º 683 de fecha 13 de agosto del 2019**, es decir, en el caso "Instituto de Previsión Social c/ María de Lourdes Gutiérrez de Amarilla s/ Amparo".

**14.1.** Al decir el segundo párrafo del Art. 24 de la Ley 3.441 que *cuando la transfusión de sangre es considerada de importancia vital para la conservación de la vida del paciente, ninguna persona podrá oponerse a la operación, so pena de incurrir en responsabilidad penal*, pareciera que la frase "ninguna persona" incluye al paciente, y de hecho, es este el entendimiento que motiva la invocación de la citada disposición legal para intentar sobrepasar la voluntad de los testigos de Jehová. Sin embargo, como muy bien lo ha captado el tribunal de apelaciones, este entendimiento no se condice con la sistemática de la Ley 3.441 y de su mismo Art. 24, ya que el objeto de la Ley, conforme lo establece su artículo primero, no es el de regular la relación entre el médico y el paciente, sino más bien el de *garantizar el acceso equitativo, oportuno, eficiente y suficiente a sangre segura y sus componentes y controlar el uso terapéutico y/o de investigación de sangre y sus hemocomponentes*. El Art. 24 (en cuyo segundo párrafo se encuentra la disposición que ahora nos interesa), establece en coherencia con este fin lo siguiente:

*Los médicos legalmente acreditados son las únicas personas que pueden prescribir transfusiones o el uso terapéutico de la sangre, sus componentes y derivados; éstos están obligados a la utilización racional de la sangre, de acuerdo a la Guías Nacionales de uso apropiado de sangre y hemocomponentes. Cuando la transfusión de la sangre es considerada de importancia vital para la conservación de la vida del paciente, ninguna persona podrá oponerse a la operación, so pena de incurrir en responsabilidad penal.*

Al leerse el Art. 24 en su totalidad y en consonancia con los fines que persigue la Ley 3.441, podrá notarse que "la prohibición de oponerse a la transfusión" no está dirigida al paciente, sino a los terceros encargados del servicio de provisión de sangre, ya que es la conducta de aquellos la que se pretende regular por la Ley (dentro de la cual ocupa un lugar preponderante el médico, ya que conforme al Art. 24, este es el único que puede prescribir una transfusión de sangre o su uso terapéutico). Entonces, de manera resumida podría decirse que el razonamiento que subyace a la interpretación sistemática de la última oración del Art. 24 es el siguiente: la ley tiene por objeto regular el acceso "equitativo y suficiente" de la sangre y sus componentes a las personas; en persecución de este objeto, los médicos, que son los únicos habilitados para prescribir una transfusión o uso terapéutico de la sangre, están "obligados" a utilizarla racionalmente, lo cual implica que deben administrarla (negando su provisión en caso de ser necesario) de manera que pueda llegar a todas las personas por igual; sin embargo, esta obligación de utilización racional no podría ser invocada para negar una transfusión en aquellos casos en los cuales la vida de un paciente se encuentra en

**Dr. ANTONIO FRETES**

**Dra. Gladys Bareiro de Mónica**  
Ministra

**Miryam Peña Candia**  
MINISTRA C.S.J.

**Abog. Julio C. Payón Martínez**  
Secretario



riesgo.-----

**14.2.** La interpretación de que la última parte del Art. 24 no se dirige al paciente, no solo guarda coherencia con la misma Ley 3.441, sino que también con todo el orden jurídico. En primer lugar, porque esto se encuentra acorde con el derecho constitucional de autodeterminación del paciente cuyo menoscabo se encuentra penado por el Art. 123 CP. Y en segundo lugar porque la última frase del Art. 24 expresa que la negativa a la transfusión podría conllevar responsabilidad penal, y en este sentido, si se entiende que la norma prohíbe al paciente negarse a la transfusión cuando su vida está en peligro, entonces se estaría afirmando nuevamente que las personas tienen una “obligación” de vivir, lo cual, como ya he explicado más arriba (ver párrafo 12.2), no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico.-----

**15.** Ahora, debo también agregar aquí que aun cuando –desafortunadamente– se intente seguir una interpretación distinta a la aquí indicada, de todos modos no se podría invocar el Art. 24 de la Ley 3.441 para obligar al paciente testigo de Jehová a recibir una transfusión de sangre. Esto es así porque incluso ante este supuesto, el paciente testigo de Jehová estaría amparado por el derecho a la “objeción de conciencia” reconocido por nuestra Constitución principalmente en su Art. 37. La objeción de conciencia es la negativa u oposición de una persona, amparada por razones de conciencia, a someterse a una orden o mandato de autoridad que un principio le sería jurídicamente exigible, siendo sus requisitos la existencia de un deber jurídico válido y la existencia de una actitud ética real, seria y basada en un criterio de conciencia religiosa o ideológica que obliga al sujeto a actuar en contra de este deber jurídico (Peña Candia, M. [2016]. Algunas Consideraciones a propósito del Derecho a la Objeción de Conciencia en el Paraguay. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Asunción-Paraguay. pp. 35-56, 39 y 40). Así, aun cuando se considere –repito, erróneamente– que el segundo párrafo del Art. 24 de la Ley 3.441 es un mandato válido que impone al paciente recibir una transfusión, teniendo en cuenta que dicha intervención médica no afecta derechos de terceros, el paciente tiene el derecho constitucional a oponerse a dicho mandato, si es que, con base en una decisión razonada conforme a sus principios personales (en este caso de carácter religioso), llega a la conclusión de que no puede ni debe someterse a tal tratamiento. En este sentido, la objeción de conciencia actúa como una forma más de hacer valer los derechos de libertad personal y de dignidad humana, al permitir que la persona puede actuar conforme a sus convicciones personales en la medida que no afecta los derechos de terceros.-----

**16. SÍNTESIS: El derecho de autodeterminación del paciente, que consiste en el derecho de rechazar un tratamiento médico y en su caso de optar por uno alternativo, es un derecho que se encuentra protegido por nuestra Constitución Nacional. Conforme a este derecho, cuando una persona de la comunidad religiosa Testigos de Jehová rechaza una transfusión de sangre y solicita un tratamiento alternativo, esta voluntad debe ser respetada por los médicos independientemente a que consideren que los tratamientos alternativos no son adecuados o que consideren a los motivos de la negativa como irracionales. En este contexto, la disposición contenida en el segundo párrafo del Art. 24 de la Ley 3.441 no puede ser invocada para sobrepasar la voluntad del testigo de Jehová, ya que dicha disposición no regula la relación entre el médico y el paciente. Finalmente, en caso de que los tratamientos alternativos no surtan el efecto esperado y la salud del testigo de Jehová empeore, el médico no tendrá responsabilidad por el empeoramiento si es que ha cumplido adecuadamente con su deber de información al paciente y no ha cometido ninguna otra conducta negligente al llevar a cabo los tratamientos alternativos.**-----

Asimismo, debo resaltar una vez más que los fundamentos de la constitucionalidad del segundo párrafo del Art. 24 de la Ley 3.441 “De Sangre” no pueden ser los fundamentos expuestos en el Ac. y Sent. N° 683 de fecha 13 de agosto del 2019 dictado por esta Sala Constitucional. La razón por la cual el segundo párrafo del Art. 24 de la Ley 3.441 es constitucional, es que dicha disposición no regula la relación médico-paciente, es decir, la disposición no se dirige al paciente sino a los médicos o terceras personas, como acertadamente se ha entendido en el Ac. y Sent. 83 de fecha 27 de agosto del 2019 dictado por el Tribunal de Apelaciones Civil y Comercial 4.<sup>ta</sup> Sala de la Capital.-----

Finalmente, debo resaltar que la opinión que he aquí expresado se dirige a explicar porque un paciente testigo de Jehová tiene el derecho a negarse a recibir una transfusión de sangre y, por tanto, mi





ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:  
"PROMOVIDA POR JEIMNY PAMELA VERA  
MARTINEZ EN REPRESENTACION DE COSME  
VERA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JEIMNY  
PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION  
DEL SR. COSME VERA C/ HOSPITAL DE TRAUMA  
"PROF. DR. MANUEL GIAGNI" S/ AMPARO". AÑO:  
2018 - N.º 2107.

RECIBIDO  
30.07.2019  
REGISTRO  
S.P.D.P.

fundamentación no debe ser entendida como una suerte de pre-opinión sobre la eutanasia, cuestión que en su caso, deberá ser discutida cuando se de la oportunidad para ello.

**17. CONCLUSIÓN:** La presente acción de inconstitucionalidad, en lo que respecta a la impugnación del Art. 24 de la Ley 3.441 "De Sangre", debe ser rechazada teniendo en cuenta que conforme a los fundamentos expuestos más arriba a partir del párrafo 14, esta disposición, al ser interpretada de la forma aquí indicada, se encuentra en consonancia con nuestra Constitución.

No obstante, considero que sí debe hacerse lugar a la acción de inconstitucionalidad con respecto a la impugnación de la **S.D. N° 295 de fecha 23 de julio del 2018** y del **Ac. y Sent. N° 38 de fecha 8 de agosto del 2018**, puesto que dichas resoluciones confirman la posibilidad de poder transfundir sangre al Sr. Cosme Vera pese a su expresa negativa, y en tal sentido, estas resoluciones llevan a una conculcación directa de su derecho constitucional a elegir sus tratamientos médicos.

**18.** Por tanto, conforme a lo extensamente expuesto, voto por rechazar la acción de inconstitucionalidad con respecto al Art. 24 de la Ley 3.441, y por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad con respecto a la **S.D. N° 295 de fecha 23 de julio del 2018** y en contra del **Ac. y Sent. N° 38 de fecha 8 de agosto del 2018. ES MI VOTO.**

A su turno el Doctor **FRETES** dijo: Se presenta la Abogada Irene Alonso Ortega y la Señora Jeimini Pamela Vera Martínez en nombre y representación del señor Cosme Vera, a fin de promover Acción de Inconstitucionalidad en contra la *S.D. N°295 de fecha 23 de julio de 2018 dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno de la Capital y el Acuerdo y Sentencia N°38 de fecha 8 de agosto de 2018, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, de la Capital*, y contra el artículo 24° de la Ley N°3441/2008 en los autos caratulado como: "JEIMNY PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION DEL SR. COSME VERA C/ HOSPITAL DE TRAUMA "PROF. DR. MANUEL GIAGNI" S/ AMPARO".

La S.D. N°295 de fecha 23 de julio de 2018 dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno de la Capital, en la parte resolutive dispone: *"I- NO HACER LUGAR a la acción constitucional de amparo promovida por la Sra. JEIMMY PAMELA VERA MARTINEZ, en contra del HOSPITAL DE TRAUMA "PROF. DR. MANUEL GIAGNI", así como la medida cautelar solicitada, de conformidad con las consideraciones expuestas en el exordio de la presente resolución..."*.

El Acuerdo y Sentencia N°38 de fecha 8 de agosto de 2018, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, de la Capital, en la parte resolutive dispone: *"I- Declarar desierto el recurso de nulidad. II- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la accionante, y en consecuencia, III- Confirmar in totum la S.D.N°295 del 23 de julio de 2018, dictada por el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial del 20° Turno"*.

El artículo 24° de la Ley N°3441/2008 "DE SANGRE":

#### ACTO TRANSFUSIONAL

Artículo 24.- Indicación de la transfusión. Los médicos legalmente acreditados son las únicas personas que pueden prescribir transfusiones o el uso terapéutico de la sangre, sus componentes y derivados; éstos están obligados a la utilización racional de la sangre, de acuerdo a las Guías Nacionales de uso apropiado de sangre y hemocomponentes.

Dr. ANTONIO FRETES

Dra. Gladys Bareiro de Mónica  
Ministra

Miryam Peña Candia  
MINISTRA C.S.J.

Abog. Julio C. Pavón Martínez  
Secretario



**Cuando la transfusión de sangre es considerada de importancia vital para la conservación de la vida del paciente, ninguna persona podrá oponerse a la operación, so pena de incurrir en responsabilidad penal.**-----

En atención a las cuestiones señaladas más arriba, el accionante expreso: "...estamos ante una situación flagrante de violación de los Derechos Humanos fundamentales al pretenderse dejar de lado y violentar la voluntad fehacientemente documentada del paciente como adulto capaz de elegir tratamiento médico sin sangre, expresada categóricamente por el propio paciente a los médicos y por escrito en el documento proporcionado al Hospital- "Directivas Anticipadas y designación de un representante para la atención de la salud"-, afectándose su dignidad, su libertad de culto y su conciencia, todas garantizadas por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales..."-----

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado, expreso: "... esta Representación fiscal es del parecer que corresponde el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad..."-----

Examinados estos autos, en relación a la Sentencia Definitiva, como así también del Acuerdo y Sentencia impugnado, se advierte que se encuentran fundados razonablemente, circunstancia que no amerita considerarlo como violatorio del orden constitucional, o arbitrario como manifestó el accionante. Ya hemos sostenido en reiterados fallos que **"EL VICIO DE ARBITRARIEDAD DEBE SER GRAVE Y TIENE QUE PROBARSE. ...De ahí el recurso extraordinario por arbitrariedad de la sentencia, como el mismo tribunal lo observa, reviste carácter excepcional y no tiene por objeto abrir una tercera instancia ordinaria en donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas."** (Néstor Pedro Sagües, Compendio de Derecho Procesal Constitucional, Bs. As., Ed. Astrea, 2ª reimpresión. 2016, p.217). La decisión tomada por los juzgadores está basada en constancias obrantes en los autos principales traídos a la vista y ha existido interpretación de las leyes aplicables al caso concreto, surgidas del leal saber y entender. En los interlocutorios, los magistrados han expuesto los motivos de la conclusión a que han arribado, no se observa violación de normas constitucionales que rigen el debido proceso contemplado en los arts. 16, 17 y 256 de la Constitución Nacional, como tampoco se observa que se haya violentado el principio de igualdad contemplado en los Arts. 46 y 47 de la Ley Suprema. Así también, en cuanto a la Libertad Religiosa y la Ideológica consagrado en el artículo 24 de la Constitución Nacional, creo necesario suscribir mi parecer con el Acuerdo y Sentencia N°783 de fecha 13 de agosto de 2019, en donde ésta Sala ya ha sentado postura en cuanto a que: *"el derecho a la autonomía debe ser respetado en tanto y cuanto no nos encontremos ante una hipótesis de gravedad extrema o peligro inminente de muerte, en cuyo caso, en derecho a la vida prevalecerá por expresa disposición del art. 4 de nuestra Ley fundamental. Por de pronto, el derecho de autonomía o de optar por tratamiento alternativos, tampoco puede prevalecer si no existe un tratamiento distinto que permita salvar la vida del paciente"*-----

Ahora bien, en cuanto a la impugnación del art. 24 de la ley 3441/2018 "De Sangre", haré un breve y conciso análisis. En primer término se vislumbra que el agravio radica en que el señor Cosme Vera fue víctima de un accidente de tránsito, situación que desembocó en el procedimiento invocado en el artículo señalado más arriba (transfusión de sangre), contrariamente a la voluntad del paciente alegando expresamente a través del formulario de "Directivas Anticipadas y Designación de un Representante para la Atención de la Salud", en la cual señalo ser "Testigo de Jehová y no aceptar transfusiones de sangre completa, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma bajo ningún concepto, aunque el personal médico las crea necesarias para salvar la vida entre otras cosas."-----

La ley suprema es clara referente al derecho a la vida, y seguiré sosteniendo que dicho derecho es el origen de todos los derechos fundamentales y como bien lo señala el art. 4° de la Constitución, es inherente a la persona humana, y su protección está garantizada, existiendo para el efecto prohibición constitucional de atentar en contra de la misma. Si bien es cierto el accionante no pretende dejar de vivir ni atentar en contra de su propia vida, por el contrario argumenta que existen otros procedimientos aplicables para su caso particular, no siendo indispensable y el único método la transfusión. Ante esta circunstancia esta Sala no puede fungir o investirse de idoneidad para hacer una ponderación de procedimientos médicos acordes para cada caso particular, debemos limitarnos a entender la constitucionalidad de las normativas, y en cuanto la constitucionalidad tanto de las normativas aplicadas, como así se sus respectivos procedimientos





# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RECIBIDO  
30 Dic. 2019  
Rosa López

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:  
"PROMOVIDA POR JEIMNY PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION DE COSME VERA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JEIMNY PAMELA VERA MARTINEZ EN REPRESENTACION DEL SR. COSME VERA C/ HOSPITAL DE TRAUMA "PROF. DR. MANUEL GIAGNI" S/ AMPARO". AÑO: 2018 – N.º 2107.

armonizan íntegramente con nuestra política de salud pública (art. 68 y 69 C.N.), como así con la Ley Suprema que traza el camino a seguir de manera tal a no quebrantar bajo ninguna circunstancia el derecho a la vida y la garantía su protección.

Por tanto, no existiendo violación de principios, derechos, ni de garantías constitucionales a ser reparado por esta vía, y visto el parecer de la Fiscalía General del Estado, no corresponde hacer lugar a la presente Acción de Inconstitucionalidad promovida, con costas conforme a lo previsto en el Art. 192 del C.P.C. Es mi voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

*Dra. Gladys Bareiro de Mónica*  
Ministra

Secretario

*Dr. ANTONIO FRETES*  
Ministro

*Miryam Peña Candia*  
MINISTRA C.S.J.

SENTENCIA NÚMERO: 1135

Asunción, 30 de Diciembre de 2019-

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**Sala Constitucional**

**RESUELVE:**

**NO HACER LUGAR** a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Abogada Abigail Irene Alonso Ortega y la Señora Jeimni Pamela Vera Martínez, en representación del Señor Cosme Vera, contra del Art. 24 de la Ley 3.441; la **S.D. N° 295 de fecha 23 de julio del 2018**, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno de la Capital; y del **Ac. y Sent. N° 38 de fecha 8 de agosto del 2018**, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala de la Capital.

**IMPONER** costas de conformidad e lo establecido en el Art. 192 del C.P.C.

**ANOTAR**, registrar y notificar.

Ante mí:

*Dra. Gladys Bareiro de Mónica*  
Ministra

*Abog. Julio C. Pavón Martínez*  
Secretario

*Dr. ANTONIO FRETES*  
Ministro

*Miryam Peña Candia*  
MINISTRA C.S.J.

